

Punta Arenas, trece de febrero de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Comparecen la abogada Paulina Valle Ode, por la denunciante -Regina Leonor Sobarzo Vidal- y el abogado Claudio Benavides Castillo por la denunciada - Fisco de Chile Dirección de Sanidad de la Armada del Hospital FFAA Cirujano Guzmán-, en los autos laborales RIT T-45-2024, caratulados "Sobarzo con Fisco", del Juzgado de Letras del Trabajo de Punta Arenas, e interponen recursos de nulidad en contra de la sentencia dictada con fecha veinte de noviembre de dos mil veinticuatro, que acoge la denuncia solo en cuanto declara que la denunciada ha vulnerado los derechos fundamentales de la denunciante -específicamente su derecho a la integridad psíquica-, por lo que la condena a emitir, como medida reparatoria, un comunicado al interior del Hospital de las FFAA Cirujano Guzmán, ofreciendo disculpas públicas a la actora por haber vulnerado su integridad psíquica -a raíz de la dilación excesiva en dejarse sin efecto el despido intentado llevar adelante mientras ella hacía uso de licencia médica-, comprometiéndose además a adoptar las medidas necesarias para evitar que conductas como la descrita no se repitan en el futuro, debiendo remitir copia de la misma al tribunal, todo bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 492 del Código del Trabajo, dentro de los cinco días hábiles siguientes a que la sentencia quede ejecutoriada.

Ambas partes fundan sus recursos, respectivamente, en la causal del artículo 478 letra e) del Código del Trabajo y, en subsidio la del artículo 478 letra b) del mismo cuerpo legal.

La denunciante solicita, se declare la nulidad invalidando el procedimiento totalmente o la invalidación de la sentencia definitiva, objeto del recurso, retrotrayendo el proceso al estado que corresponda y/o procediendo a dictar la correspondiente sentencia de reemplazo que declare que hace lugar a la demanda de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales y daño moral en procedimiento de tutela laboral, así como también las prestaciones reclamadas, con costas, tanto de la instancia como las del alzada, todo



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VZEFXSECHDU

sin perjuicio de la facultad de esta Corte a que alude el artículo 479 inciso final del Código Laboral.

La denunciada pide que se invalide la sentencia en aquella parte que acoge la denuncia por vulneraciones de derechos fundamentales, y, dictándose la correspondiente sentencia de reemplazo, resuelva que no se da lugar a la demanda, por no haberse acreditado la vulneración denunciada, y habiendo dado una justificación objetiva de las medidas adoptadas, concordante con la prueba allegada al juicio, se debe concluir la inexistencia de la vulneración alegada.

Los recursos fueron declarados admisibles y en la vista de la causa comparecieron las partes representadas por sus abogadas quienes presentaron alegatos en los que expusieron lo conveniente a sus derechos.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de nulidad laboral tiene por objeto, según sea la causal invocada, asegurar el respeto a las garantías y derechos fundamentales, o bien, conseguir sentencias ajustadas a la ley, como se desprende de los artículos 477 y 478 del Código del Trabajo, todo lo cual evidencia su carácter extraordinario que se manifiesta por la excepcionalidad de los presupuestos que configuran cada una de las referidas causales en atención al fin perseguido por ellas, situación que igualmente determina un ámbito restringido de revisión por parte de los tribunales superiores y que, como contrapartida, impone al recurrente la obligación de precisar con rigurosidad los fundamentos de aquellas que invoca, como asimismo, de las peticiones que efectúa.

Igualmente, cabe tener presente que el recurso de nulidad no constituye una instancia, de manera que estos sentenciadores no pueden ni deben revisar los hechos que conforman el conflicto jurídico de que se trata, siendo la apreciación y establecimiento de éstos una facultad exclusiva y excluyente del juez que conoció del respectivo juicio oral laboral, y, asimismo, a esta Corte le está vedado efectuar una valoración de la prueba rendida ante el Juzgado del



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VZEFXSECHDU

Trabajo, lo que compete únicamente a éste y el cual está dotado de libertad para ello, con la sola limitación de no contrariar los principios de la lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, siendo el cumplimiento de este límite lo que cabe controlar, cuando se invoca la correspondiente causal de nulidad.

Asimismo, el recurso de nulidad es un arbitrio de derecho estricto que requiere claridad y precisión en su fundamentación, lo que resulta necesario toda vez que aquello da y define la competencia del Tribunal superior, el cual no puede acogerlo por motivos distintos, salvo la situación contemplada en el inciso final del artículo 479 del Código del Trabajo, y al respecto el inciso final del artículo 478 del mismo cuerpo legal impone al recurrente, si el recurso se fundare en distintas causales, la obligación de señalar si se invocan conjunta o subsidiariamente.

Finalmente, la influencia que cada una de las causales promovidas tenga con lo dispositivo del fallo es de la esencia de este arbitrio recursivo excepcional, la que debe ser sustancial, lo cual implica que al punto que, aun cuando la sentencia pueda contener defectos si su corrección no es suficiente para variar lo resuelto, el recurso debe ser rechazado.

SEGUNDO: Que la denunciante interpuso en primer lugar la causal del artículo 478 letra e) del Código del Trabajo, esto es, por haberse dictado la sentencia con omisión de los requisitos establecidos en el artículo 459 N° 4 del mismo código, referido al análisis de toda la prueba rendida.

Alega que el fallo recurrido omitió el análisis de toda la prueba, incumpliendo las exigencias de la motivación fáctica que debe cumplir; que carece de los elementos necesarios tendientes a analizar y fundamentar toda la prueba rendida, señalando las razones que conducen a la conclusión arribada.

Plantea que estamos en presencia de una falta de fundamentación de la sentencia, pues el juez se limita a transcribir en forma prácticamente textual toda la prueba



rendida por ambas partes, junto a las observaciones a la prueba, sin embargo, no efectúa un análisis ni razonamiento de la misma por ejemplo de la declaración de los testigos presentados por su parte (Rubén Riquelme Pérez, Claudia Lameles, Rubén Villaroel y Patricia Rijks) y la prueba documental consistente en reclamos, denuncias, oficios de Contraloría, así como también correos electrónicos y exhibición ofrecida.

Agrega que no hubo un análisis de la lesión por derechos fundamentales a su representada, específicamente a la Garantía de Indemnidad, en su considerando duodécimo.

De esta manera la prueba no fue analizada por el sentenciador, quien luego del razonamiento lógico debía llegar a la conclusión, de acoger la demanda, toda vez que se trata de prueba que debía ser contrastada con la ofrecida por la demandada de igual entidad, pero que arbitrariamente el tribunal decide no analizar ni darle valor alguno.

Sostiene que hay omisión y no se efectuó análisis de la carta de aviso de despido y su contenido, así como de las multas reclamaciones y consultas formuladas por la actora, tanto a Contraloría, como participación como testigo en una causa laboral ni el intento previo de denuncia a la Inspección, simplemente se omite, vulnerando nuevamente con ello, lo establecido en el citado artículo 478 letra e.

Asevera que, de haberse analizado la declaración de los testigos de su parte, cotejado con los documentos acompañados, rendidos como prueba en el presente juicio, se habría determinado la existencia de daño moral; que las conclusiones fácticas a que arribó el sentenciador respecto a la determinación de existencia de daño moral, llevaron a rechazarlo, por lo que la omisión del análisis de toda la prueba rendida influyó en lo dispositivo del fallo.

TERCERO: Que, para resolver el recurso es pertinente dejar asentado que la sentencia en el considerando cuarto se refiere a la prueba documental y testimonial rendida por la denunciante; luego en el considerando quinto menciona la prueba documental y testimonial rendida por la denunciada,



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VZEFXSECHDU

haciendo también referencia a oficios y exhibición de documentos. Por último en el motivo octavo, consigna que "apreciada la prueba rendida por las partes -documental, testimonial, exhibición documental y oficios-, de conformidad con las reglas de la Sana Crítica, resultaron probados los siguientes hechos, de aquéllos fijados como hechos a probar en el presente juicio:

-En cuanto al hecho a probar N°1 (remuneraciones y demás prestaciones laborales pactadas):

"La relación laboral comenzó el 1 de marzo de 2020, suscribiéndose un contrato de trabajo con fecha 19 de mayo del mismo año, obligándose la actora a prestar los servicios de administrativo de remuneraciones en el Hospital de las FF.AA. Cirujano Guzmán de esta ciudad y la denunciada a pagarle una remuneración consistente en un sueldo base correspondiente al Grado 15, del convenio profesionales, ascendente, a la fecha de suscripción del contrato, a la suma de \$1.046.317".

-En cuanto al hecho a probar N°2 (Efectividad de haber incurrido la denunciada en conductas que limiten injustificadamente, en forma arbitraria o desproporcionadamente o sin respeto a su contenido esencial, los derechos o garantías constitucionales invocadas por la actora. En particular, efectividad de haberse afectado su derecho a la vida e integridad física y psíquica, así como su garantía de indemnidad. Hechos y circunstancias) y N°3 (En la afirmativa del punto anterior, necesidad, idoneidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas por la denunciada. Hechos y circunstancias), se estiman probados los siguientes (que se han procurado ordenar cronológicamente, en la medida de lo posible, para su mejor comprensión):

2.1.- Habiendo solicitado la denunciante previamente -con fecha 25 de enero de 2024, vía correo electrónico dirigido a René Sobarzo, -rsobarzo@sanidadnaval.cl-, que se le indicara procedimiento para realizar la solicitud de teletrabajo en forma que ha determinado la DIRECSAN (sic), atendida la entrada en vigencia el 29 del mismo mes y año, de



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VZEFXSECHDU

la Ley 21.645 -invocando el artículo 152 quáter 0 bis- y el hecho de tener a su hijo de 4 años de edad a su cuidado, adjuntando, entre otras cosas, su certificado de discapacidad emitido por la COMPIN, no recibió respuesta de su empleador; por lo anterior, con fecha 12 de febrero volvió a enviar un correo electrónico al mismo destinatario, preguntando si había alguna novedad respecto al tema, pues necesitaba organizar los tiempos con su hijo, señalando que lo ideal sería solicitar el beneficio de teletrabajo en jornada AM. Ante la nula respuesta, remitió un nuevo correo electrónico el 26 de febrero, dirigido a la funcionaria administrativa de Recursos Humanos Yasna Parada, haciendo ver que, a un mes de realizada la consulta, no había recibido respuesta formal ni oficial, sobrepasando a su juicio el límite que la ley indicaba para el pronunciamiento del empleador. El 4 de marzo, envió un nuevo correo, señalando que terminaba sus vacaciones el 8 de marzo siguiente y aún no tenía respuesta a su solicitud de teletrabajo; el 6 de marzo, a las 07:29 horas, volvió a formular idéntica solicitud, indicando que presentaría denuncia formal con el organismo fiscalizador correspondiente. Finalmente, el mismo 6 de marzo, a las 09:09 horas, la funcionaria Yasna Parada le respondió que, referente a su solicitud y de acuerdo a instrucciones, le solicitó que, una vez terminado su permiso, se acercara a conversar con la jefatura siguiendo el conducto regular; luego, a las 11:37, la misma funcionaria le respondió que la Comandante O'Reilly -Jefa de Recursos Humanos- le solicitó que le avisara que podía recibirla el lunes 11 del presente mes, a las 11:00 horas".

Lo anterior constó, fundamentalmente, del documento N°30 de la prueba de la denunciante, así como de su documento N°49.

2.2.- "El día 26 de febrero de 2024, la denunciante solicitó audiencia con el Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval, a través de la Ley del Lobby, gestionándose por su superiora jerárquica -la Comandante Paula O'Reilly-, una reunión previa con el Director del Hospital, el día diez u



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VZEFXSECHDU

once de marzo siguiente, para saber los temas que quería plantear a la autoridad, concretándose finalmente la reunión solicitada, con fecha 22 de marzo de 2024”.

Esto fluyó de lo aseverado en la denuncia, sumado a la declaración de la testigo de la denunciada, Paula O’Reilly Fuenzalida.

2.3.- “Tras haberse presentado la actora a trabajar el día 11 de marzo de 2024, el día 12 de marzo siguiente fue recibida por la Comandante O’Reilly en su oficina, ocasión en la que ésta última le entregó una carta de aviso de despido, por la causal del inciso 1° del artículo 161 del Código del Trabajo, esto es, necesidades de la empresa, que la actora se negó a aceptar. Se le despachó una copia por carta certificada a su domicilio el día 13 de marzo, que le llegó el día 18 del mismo mes, lo que se le confirmó por correo electrónico en la última fecha señalada. La denunciante presentó una licencia médica a partir del día 11 de marzo de 2024, hasta el 9 de abril de 2024, lo que impidió que la denunciada hiciera efectivo el despido. El día 3 de abril de 2024, la actora remitió un correo electrónico a la funcionaria Yasna Parada, recordándole que estaba con licencia médica hasta el 9 del mismo mes, indicándole que, si no había una instrucción de dejar sin efecto la carta de despido, se le indicara el horario del día miércoles 10 de abril en la Notaría que debía concurrir (sic) para la formalización del finiquito. Finalmente, con fecha 26 de abril de 2024, se le informó a la actora la decisión de no hacer efectivo su despido”.

Esto emanó de la declaración de la testigo de la denunciada, ya referida, de su documento N° 9 -registro de asistencia de la actora-, así como de la documental aportada por la denunciante (Números 11 -carta de despido-, 12 -comprobante envío carta-, y 50 -correo electrónico de 3 de abril de 2024-). En cuanto a la fecha en que finalmente se le informó a la actora la decisión final de dejar sin efecto su despido, si bien la testigo O’Reilly indicó que ello había ocurrido el 26 de marzo, ello resultó desvirtuado con el



correo de 3 de abril de 2024, en que se consigna que, a esa fecha, aún no se le informaba lo decidido; por ello, se estuvo a la fecha de ocurrencia de lo anterior que se indicó en la demanda, no desvirtuada con algún otro antecedente en contrario.

2.4.- “El 27 de mayo de 2024 la actora envió un correo electrónico a la Jefa de RR.HH, la Comandante Paula O’Reilly, indicándole que aún no tenía respuesta a su solicitud de teletrabajo y que regresaba de vacaciones ese mismo día. Respondiéndole por correo electrónico de fecha 28 de mayo de 2024, la referida jefatura le indicó a la actora que, tal como se lo había comentado verbalmente y por email del día 6 de mayo anterior, necesitaba que le enviara un correo de solicitud formal de las dos jornadas de teletrabajo (4 mañanas o 4 tardes o dos días completos) para generar anexo al contrato de trabajo, elevarlo a la Dirección de Sanidad y dar curso al teletrabajo. Por correo de ese mismo 28 de mayo, la actora le solicitó 4 jornadas de mediodía AM (sic) para teletrabajo, de lunes a jueves, indicando que agradecería se gestionara a la brevedad posible. La denunciada dio respuesta a esta última petición, mediante propuesta de modificación contractual de fecha 4 de junio de 2024 -para regir a contar del día 5 del mismo mes- en la que se incluyó, en su cláusula tercera, la distribución de la jornada ordinaria de trabajo, incluyendo teletrabajo de lunes a jueves, desde las 08:00 a las 13:30 horas y, ofreciendo además un bono de conectividad de \$50.000, con el propósito del uso de internet, por suministro de energía eléctrica y otros similares para el desempeño de las funciones encomendadas por el empleador, pagadero con la misma periodicidad que sus remuneraciones”.

Esto último fluyó de los documentos N°39 y N°43 de la parte denunciante”.

En los motivos siguientes se hace cargo de las pretensiones de las partes, dando por establecida -en los considerandos décimo y undécimo- una vulneración al derecho a la integridad psíquica de la denunciante, desestimando la denuncia lo demás.



CUARTO: Que, sobre la primera causal de nulidad invocada por ambos recurrentes, el artículo 478 del Código del Trabajo prescribe que: "El recurso de nulidad procederá, además" ... "e) Cuando la sentencia se hubiere dictado con omisión de cualquiera de los requisitos establecidos en los artículos 459, 495 o 501, inciso final, de este Código, según corresponda; contuviese decisiones contradictorias; otorgare más allá de lo pedido por las partes...". Por su parte el referido artículo 459 prescribe que "La sentencia definitiva deberá contener: ... 4.- El análisis de toda la prueba rendida, los hechos que estime probados y el razonamiento que conduce a esta estimación;".

Esta causal persigue constatar si se analizó o no toda la prueba rendida, si se contienen los hechos que se estiman probados y el razonamiento que conduce a esta estimación, por lo que no corresponde para ello revisar el proceso de razonamiento o el mayor o menor valor de la prueba aportada al juicio o ponderación de alguna en particular realizada en la sentencia.

Asimismo, dada la naturaleza y características del recurso de nulidad, necesariamente se requiere para que se configure la causal en estudio, que se demuestre con certeza cuál es la prueba cuyo análisis habría sido omitido y su contenido en relación a los hechos probados a fin de explicar su relevancia respecto de la que fue efectivamente analizada en el fallo al resolver la controversia sometida a la decisión del tribunal para determinar su incidencia en lo resuelto.

QUINTO: Que, a su turno, la denunciada igualmente interpuso la causal del artículo 478 letra e) del Código del Trabajo, por haberse omitido el análisis de toda la prueba rendida.

Funda esta causal en que la sentencia impugnada en sus considerandos cuarto y quinto realiza una somera singularización de la prueba rendida por ambas partes, luego, en el considerando undécimo, el sentenciador indica que, conforme a las conclusiones fácticas asentadas en el punto



2.3 del considerando octavo, se estima que lo ocurrido en este caso "necesariamente implicó una vulneración al derecho a la integridad psíquica de la denunciante", entendiendo que el tribunal ha incurrido en deficiencias en torno al análisis de la prueba rendida y en el ejercicio de razonamiento respectivo ya que se omite completamente analizar la prueba documental relativa a las licencias médicas de la denunciante, las cuales dan cuenta de una situación médica preexistente de índole psiquiátrica. Debido a que se aprecia que la trabajadora se encontraba con licencias médicas continuas desde abril de 2023 hasta enero de 2024, todas otorgadas por médico psiquiatra por enfermedad común, evidenciando una condición de salud mental preexistente al periodo en que se alega la vulneración.

Plantea que esta omisión en el análisis probatorio resulta especialmente grave, pues al existir una situación médica psiquiátrica previa e independiente de la supuesta aflicción por la demora administrativa, era indispensable que el tribunal analizara estos antecedentes para poder establecer el necesario nexo causal entre la conducta del empleador y el supuesto daño alegado, requisito esencial para configurar una vulneración de derechos fundamentales.

Por otro lado, entiende que la sentencia carece gravemente de un análisis completo y sistemático de la prueba aportada al juicio, resultando especialmente relevante dicha omisión en relación al testimonio de la Comandante O'Reilly, jefatura directa y testigo clave, cuya declaración fue arbitrariamente fragmentada por el tribunal.

Agrega que, se omite analizar testimonios de los demás testigos que hicieron alusión a ciertas circunstancias de relevancia para el presente caso, como son los procedimientos habituales para decisiones en una institución militar, los plazos normales para decisiones administrativas complejas, la estructura jerárquica y sus implicancias en la toma de decisiones.

Sostiene que la sentencia tampoco explica el proceso lógico mediante el cual concluye que la demora fue



"excesiva", omitiendo la expresión de parámetros objetivos utilizados para calificar un plazo como excesivo en el contexto de una institución militar jerárquica y tampoco fundamenta por qué las justificaciones del Hospital resultan "insuficientes", limitándose a una declaración general que no explica las aristas previamente indicadas.

Concluye, en este punto que, el vicio de nulidad acusado influye en lo dispositivo del fallo, en cuanto la falta de análisis íntegro de la prueba impidió valorar las justificaciones del Hospital, ponderar la estructura institucional y establecer correctamente los hechos; la ausencia de razonamiento no permitió determinar si la demora era realmente excesiva, evaluar la suficiencia de las justificaciones o acreditar la existencia la aflicción alegada; y, la omisión de razones jurídicas y lógicas llevó a establecer una vulneración sin fundamento suficiente, prescindiendo del análisis de la conducta de las partes y asumiendo conclusiones sin respaldo probatorio.

SEXTO: Que, en la especie, no se configuran las causales de nulidad del artículo 478 letra e) en relación al artículo 459 N°4 del Código del Trabajo que fueron alegadas por ambas partes al no reunirse los requisitos del considerando cuarto.

En efecto, como se refiere en el motivo tercero, la sentencia recurrida contiene el señalamiento de toda la prueba rendida por las partes en la acreditación de los hechos, por lo que no se advierte la falencia denunciada por los recurrentes, lo que se confirma en lo que expone el sentenciador en el considerando décimo noveno al decir: "Que, las restantes pruebas rendidas en el juicio, en nada alteran las conclusiones arribadas precedentemente, de manera que no se analizarán en detalle, por resultar ello inoficioso", lo que implica que efectivamente ponderó las pruebas que las partes incorporaron en la audiencia de juicio y lo que no se detalló ni reprodujo de alguna o algunas partes de esas pruebas, carece de relevancia en la decisión del asunto por lo que resulta innecesario reproducirlas y no es exigible para la causal en estudio desde que, como se dijo, no permite



alterar lo resuelto y consecuentemente se estima inoficioso hacerlo.

En este punto se entiende que la causal en estudio es una que requiere de prueba, la que debe ofrecerse formalmente, a fin de que el tribunal de invalidación fije una audiencia para rendirla, a la que pueda acudir la contraparte, si es que lo estima pertinente, la cual puede ser, perfectamente, la misma audiencia en que se escuchan los alegatos de las partes.

No obstante, las partes no rindieron prueba de la causal bajo análisis, no bastando sus propios argumentos y críticas al fallo por estimar que existirían omisiones en la información incorporada en especial lo relativo a la prueba testimonial ofrecida que de haberse ponderado habría permitido decidir el asunto controvertido de un modo distinto.

Así entonces, de la lectura de ambos recursos se advierte que lo que se pretende por los recurrentes es que esta Corte valore nuevamente la prueba rendida, pretensión que no corresponde a la causal interpuesta ni al recurso de nulidad en esta materia.

SEPTIMO: Que, la denunciante interpone, en subsidio, la causal del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, por haber sido dictado el fallo con infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba conforme al artículo 456 del mismo código.

Alega -en síntesis- que la sentencia recurrida contiene motivaciones fácticas contradictorias y carece de eslabones lógicos en las inducciones que realiza, así como tampoco explica cómo es que llega a las conclusiones que llega, dejando de lado hipótesis perfectamente factibles al no considerar la declaración de las testigos aportadas y los documentos.

Insiste en que las máximas de la experiencia obligaban al juez a analizar y valorar la prueba de un modo distinto del que lo hizo, quedando en evidencia que el sentenciador se alejó de las mismas.



En atención a lo señalado y de no haberse conculcado las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, se habría acogido la demanda en todas sus partes, en especial en lo referente a la garantía de indemnidad y procedencia del daño moral.

OCTAVO: Que, para que se configure la causal de invalidación contemplada en la letra b) del artículo 478 del Código del Trabajo, es necesario que concurren dos requisitos copulativos, a saber: que la sentencia se haya dictado con infracción a las reglas de la sana crítica; y que esta sea manifiesta, es decir, sea evidente, clara y notoria de la lectura del fallo, lo que debe surgir desde el contenido de la sentencia, sin que corresponda realizar una nueva valoración de la prueba rendida en el juicio.

NOVENO: Que, en materia laboral, los jueces deben valorar la prueba presentada en el juicio, conforme lo dispone el inciso segundo del artículo 456 del Código del Trabajo, que señala que deben expresar las razones jurídicas y las simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud les asigne valor o las desestime. En general, tomar en especial consideración la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de las pruebas o antecedentes del proceso que utilice, de manera que el examen conduzca lógicamente a la conclusión que convence al sentenciador".

DECIMO: Que así entonces la parte que pretenda una revisión de ese tipo debe satisfacer el imperativo de demostrar la vulneración de tales reglas. Por lo mismo, resulta indispensable que no solo las identifique o señale; además de explicar cómo y por qué se habrían vulnerado en el caso concreto; qué hechos específicos estarían comprometidos en esa supuesta vulneración y, en fin, de qué manera podría alterarse la decisión adoptada en la instancia respectiva.

UNDECIMO: Que, a su turno, la denunciada igualmente alega en forma subsidiaria la causal del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo.



Funda esta causal en que existe una infracción a los principios de la lógica, específicamente el de Razón Suficiente, primero al determinar la existencia de causalidad entre la demora y el supuesto daño y segundo al descartar el sentenciador sin ninguna fundamentación las explicaciones sobre la necesidad de asesoría jurídica invocadas por su parte, acreditadas por la testigo clave Paula O'Reilly.

Aduce que, a su vez, el sentenciador no explica por qué un mes y medio es un plazo excesivo, considerando la complejidad inherente que supone dejar sin efecto un despido ya notificado, en el contexto de una estructura jerárquica militar, lo cual permitiría entender los tiempos de los plazos administrativos.

Por otra parte, arguye que se incurre en una infracción a las reglas de la sana crítica al basar su decisión exclusivamente en máximas de la experiencia para establecer la existencia de una vulneración a la integridad psíquica ya que el razonamiento del tribunal confunde lo que podría ser una legítima molestia o incomodidad administrativa con un efectivo daño a la integridad psíquica constitutivo de vulneración de derechos fundamentales.

Adiciona que el sentenciador no explica por qué esta máxima de la experiencia sería aplicable al caso concreto, considerando las particulares circunstancias del mismo: se trata de una institución militar con una estructura jerárquica compleja, donde la trabajadora omitió informar su licencia médica al momento de ser notificada del despido, y donde la demora se justificó en la necesidad de obtener asesoría jurídica especializada.

Concluye exponiendo que las infracciones denunciadas han tenido una influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, por cuanto han llevado al tribunal a dar por establecida una vulneración de derechos fundamentales sin contar con el sustento probatorio necesario.

DUODECIMO: Que de la lectura del fallo, se desprende que el juez a quo, para acoger parcialmente la denuncia, expuso los razonamientos que lo llevaron a esa decisión y para ello



basta leer los considerandos octavo y siguientes de la sentencia impugnada, cumpliendo con lo previsto en el inciso segundo del artículo 456 del Código Laboral. En efecto, el sentenciador realizó un análisis de la prueba rendida por las partes en el juicio, dando por establecidos los hechos que resultaron acreditados a partir de los cuales concluyó que la excesiva dilación de la denunciada en dejar sin efecto el despido intentado efectuar respecto de la actora con infracción legal -por necesidades de la empresa a una trabajadora con licencia médica-, constituyó en definitiva una vulneración a su derecho a la integridad psíquica, lo que necesariamente impone el acogimiento de la acción de tutela en ese aspecto de la denuncia así como la medida adoptada respecto de la denunciada que se encuentra suficientemente explicada en el fallo, así como el rechazo de las demás pretensiones de la denunciante.

DECIMOTERCERO: Que las causales que se alegan subsidiariamente en relación con infracciones de las normas sobre apreciación de la prueba, conforme a las reglas de la sana crítica, se sustentan principalmente en que en algunos hechos que se tuvieron por acreditados en especial en el considerando octavo del fallo habrían errores de valoración, a lo que se adicionan otros cuestionamientos que igualmente aluden a yerros en ponderar algunos elementos de convicción, especialmente dichos de testigos que habrían sido omitidos en dicho proceso, pero al hacerlo no se cumple con un desarrollo argumentativo que permita entender vulneraciones del sentenciador en la forma como habría valorado con desapego a las reglas de la sana crítica la prueba rendida en el juicio, núcleo esencial de la causal que las oponen subsidiariamente en sus arbitrios, con influencia en lo que viene decidido.

Así es posible observar respecto del recurso de la denunciante la falta de indicación de la regla de la sana crítica que habría sido infringida, omitiendo identificar en concreto si se produce vulneración a algún principio de la lógica, máxima de la experiencia o conocimiento científicamente afianzado, ni menos cómo éstos habrían sido



vulnerados en el razonamiento del sentenciador con respecto a toda la prueba rendida por las partes en el juicio.

En efecto, la mera calificación de que "...el juez del grado, llega a una conclusión totalmente errónea y diametralmente opuesta a la que debió haber realizado siguiendo las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia..." y que "... Es tal la infracción, que derechamente podemos señalar que el sentenciador al valorar la prueba no aplicó la sana crítica" u otras expresiones similares así como los cuestionamientos que se efectúan al fallo desde la pretensión de la denunciante, confrontándolo con algunos medios de prueba, para decir que el juez habría infringido dicha normativa legal en la valoración de la prueba, resultan elementos insuficientes para entender que concurra la causal que invoca en su arbitrio desde el contenido mismo de la sentencia, al no desarrollar o expresar cómo se habría cometido la infracción en la valoración de la prueba en la sentencia para modificar lo declarado por el sentenciador, acogiendo la acción en su totalidad, menos cuando estamos en presencia de un recurso de derecho estricto que exige la existencia de una operación intelectual acorde a la causal interpuesta, que permita explicar la vulneración de la valoración conforme las reglas de la sana crítica y como dicho vicio influiría en lo dispositivo del fallo.

Por último la denunciada tampoco desarrolla la causal bajo análisis desde el contenido del fallo, sino que lo hace cotejando lo razonado con el mérito de la prueba rendida como si se tratara de un recurso de apelación.

DECIMOCUARTO: Que, además, sin perjuicio que se pudiere no compartir lo razonado por el sentenciador, tampoco se cumple el supuesto de que la infracción sea manifiesta, clara o quede en evidencia de la sola lectura del fallo.

Por lo expuesto solo cabe concluir que los recurrentes no comparten ni aceptan la decisión a la que se arribó en el fallo, contrariando las teorías del caso planteadas en el juicio, proponiendo a esta Corte proceder a realizar una valoración de la prueba diferente a la que se consigna en la



sentencia, circunstancia que es ajena a la causal de nulidad impetrada.

DECIMOQUINTO: Que, en consecuencia, al no haberse configurado las causales de invalidación invocadas, los recursos de nulidad impetrados por ambas partes deberán ser desestimados, teniendo presente al decidirlo que, en la especie, tampoco se reúnen las exigencias contenidas en el artículo 479 inciso final del Código del Trabajo para el ejercicio de la facultad contenida en dicha disposición legal solicitado por la denunciante.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en los artículos 474 y siguientes del Código del Trabajo, **SE RECHAZAN**, sin costas, los recursos de nulidad interpuestos por la denunciante y por la denunciada, respectivamente, en contra de la sentencia definitiva dictada con fecha veinte de noviembre de dos mil veinticuatro en la causa RIT T 45-2024 del Juzgado de Letras del Trabajo de Punta Arenas, la que, en consecuencia, no es nula.

Redactada por el Ministro Marcos Kusanovic.

Se deja constancia que no firma el Ministro Sr. Marcos Kusanovic Antinopai, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, por encontrarse haciendo uso de feriado legal.

Regístrese y notifíquese.

Rol N°203-2024 Laboral-Cobranza.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VZEFXSECHDU

Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Punta Arenas integrada por Ministro Suplente Juan Santiago Villa M. y Fiscal Judicial Pablo Andres Miño B. Punta Arenas, trece de febrero de dos mil veinticinco.

En Punta Arenas, a trece de febrero de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

